

La caída de la Bolsa

El comienzo del año con una caída aparatosa de la Bolsa ha desatado una serie de comentarios. Como la situación económica no era ni mejor ni peor que hace unas semanas, ha saltado la duda sobre si no habrá fuerzas ocultas que estén jugando a la baja para crear un clima de crisis económica que ponga en aprieto al Gobierno. Se ha llegado incluso a asegurar en las más altas esferas que algunos de los grandes bancos estaban promoviendo una política de abstención en las compras para hacer caer artificialmente las cotizaciones.

Sin duda, las conversaciones con la oposición y la puesta en libertad del señor Carrillo y de los otros líderes comunistas han puesto muy nerviosos a ciertos banqueros conocidos por sus sentimientos fascistoides. Uno de ellos ha comentado, hace poco, que el día que el Gobierno le dé a los españoles el derecho a votar, él pedirá a Suárez que le conceda una ametralladora porque estamos abocados a terminar de nuevo a tiros. Cuando existen banqueros con este talante y con una insensatez política de tal tamaño, todo es posible.

De ahí a afirmar que la caída de la Bolsa se debe a una conspiración hay, sin embargo, un abismo. Aparte de que este tipo de actuaciones es siempre difícil de probar, no hace falta recurrir a esa hipótesis para explicar las últimas caídas e incluso puede ser perjudicial en la medida que minimiza el problema real. Los últimos acontecimientos se explican leyendo simplemente en el periódico las noticias económicas y los discursos del ministro de Hacienda. La evolución de los índices de precios demuestran que la inflación no sólo no se está deteniendo, sino que se ha agravado en los últimos meses; la balanza de pagos ofrece unas perspectivas muy malas en unos momentos en que la OCDE anuncia un empeoramiento de la coyuntura internacional en 1977, y el número de parados crece día a día. Con este marco desolador el ministro de Hacienda ha venido a decirnos implícitamente en su reciente discurso en las Cortes, con motivo de la aprobación del Presupuesto, que su Ministerio no entiende nada de lo que está pasando y que desde luego no será el equipo actual el que se enfrente con la realidad y haga lo que es inevitable: un plan de estabilización.

Esta realidad es impopular e incluso dramática para un país en nuestras circunstancias, y por ello no es extraño que el ministro de Hacienda, con un pie en el estribo, ni incluso el Gobierno, con unas elecciones por delante, quieran reconocerla. Pero los errores de estos últimos años nos han llevado a una situación de la cual no saldremos con pequeños retoques y discursos de buena voluntad. Como ya no estamos en 1959, el plan de estabilización no podrá ser impuesto desde las alturas, sino que tendrá que ser pactado con las fuerzas políticas que tienen influencia en las clases trabajadoras. Ya no valdrán ni las medidas fiscales, que sólo tienen efecto sobre las páginas del "Boletín Oficial", ni las limitaciones de dividendos que se compensan (o se compensaban) con ampliaciones de capital, ni todos los demás artilugios que se han utilizado para conseguir que la distribución de la renta española sea de las más retrógradas de Europa. Probablemente las empresas saldrán ganando porque los trabajadores son los primeros interesados en salir de la crisis, pero los grandes accionistas perderán a buen seguro.

Al clima de incertidumbre con que ha empezado el año se ha unido, además, la terminación de las grandes ampliaciones del último trimestre de 1976 y de las compras para acogerse a las desgravaciones del impuesto general sobre la renta. Todo ello explica perfectamente la actitud abstencionista de los posibles inversores.